

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 13 MAR 2020

Auto Interlocutorio nro. _____

MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO -
EXPEDIENTE	76001-23-33-007-2017-01901-00
DEMANDANTE	ANA MARÍA ORTEGA BOTERO Y OTROS COPROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DEL OESTE CONDOMINIO CAMPESTRE
DEMANDADO	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
ASUNTO:	OBEDECER Y CUMPLIR - ADMITE DEMANDA

Visible a folios 6 al 11 del cuaderno 3, obra providencia del 09 de agosto de 2019, proferida por el Consejo de Estado, que resolvió revocar el auto interlocutorio nro. 09 del 23 de enero de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca¹, por lo que se obedecerá y cumplirá lo anteriormente decidido.

Conforme con lo anterior, se procederá a realizar el análisis de la admisibilidad de la demanda teniendo en cuenta el escrito de subsanación presentado por la parte actora el 05 de julio de 2018.

ANTECEDENTES

La señora Ana María Ortega Botero y otros copropietarios del Conjunto Residencial Bosques del Oeste Condominio Campestre, presentan, a través de apoderado, demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (art. 138 de la Ley 1437 de 2011) contra el Municipio de Santiago de Cali, con el fin que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Resolución nro. 4131.5.21.S-25 del 7 de octubre de 2016², a través de la cual se reajustó el avalúo catastral de los predios de propiedad o sobre los que ejercen posesión los demandantes, ubicados en el Conjunto Residencial Bosques del Oeste Condominio Campestre.
- Resolución nro. 4131.050.21 C-29 del 22 de marzo de 2017³, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución anterior.

¹ Ver folios 344-346

² Ver folios 128-132 cdno. 1

³ Ver folios 99-102 cdno. 1



- Resolución nro. 4131.010.21.0746 del 03 de agosto de 2017⁴, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución nro. 4131.5.21.S-25 del 7 de octubre de 2016.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó “i. Que el avalúo catastral por aplicar para las vigencias del impuesto predial unificado de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y hasta la actualización catastral, es el determinado en el proceso de actualización de la formación catastral adelantado en el año 2013, puesto en vigencia en el año 2014 mediante resolución 4131.5.14.39-544 del 31 de diciembre de 2013 y en consecuencia, que no se reajuste el impuesto predial desde la vigencia 2014 con base en los avalúos reajustados, ii) que no se reajuste el impuesto predial unificado para las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y hasta la siguiente actualización catastral, iii) en el evento que se hubieren expedido facturas cobrando la reliquidación del impuesto predial unificado por las vigencias 2014 en adelante, se revoquen o anulen tales facturas”.

En caso de no declararse la nulidad de las resoluciones, de manera subsidiaria solicita se anule únicamente el numeral 2º de la resolución 4131.5.21.S-25 del 7 de octubre de 2016, declarando que no es procedente la reliquidación del impuesto predial con base en el avalúo reajustado para las vigencia 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, y/o que no se cause interés moratorio por el no pago del reajuste del impuesto predial unificado para los años 2014, 2015, 2016 y 2017 derivado del reajuste retroactivo del avalúo catastral bajo la consideración que el error fue de la administración y no de los actores.

Mediante auto interlocutorio nro. 173 del 24 de abril de 2019⁵, se inadmitió la presente demanda, para que aportara los documentos idóneos que acrediten la calidad de propietarios o de poseedores referida para cada uno de los demandantes, así como también se ordenó allegar poder debidamente otorgado por el señor Jorge Andrés Zuluaga Sierra, relacionado como demandante en el presente asunto.

El 05 de julio de 2019, la parte demandante presentó escrito de subsanación de la demanda⁶, allegando y relacionando los certificados de tradición y libertad de los predios donde se establece el dominio de algunos demandantes y, en otros casos, aportó las facturas del impuesto predial unificado y contratos de leasing habitacional, así mismo, anexó poder a él conferido por el señor Jorge Andrés Zuluaga Sierra.

Así las cosas, revisados detalladamente cada uno de los documentos aportados por el apoderado judicial de los demandantes, se tiene que cumplió con lo requerido en el auto inadmisorio, exceptuando a los señores (as) Lydia Patricia Ramelli, Álvaro Reyes Castro y Blanca Ines Vélez Arbeláez, y en ese sentido la demanda será rechazada frente a estos demandantes, razón que pasara a explicarse.

⁴ Ver folios 80-92 cdno. 1

⁵ Ver folios 174-179 cuaderno 1A

⁶ Ver folios 195-201 cuaderno 1 y 202-342 cuaderno 1A



Si bien, las señoras Lydia Patride Ramelli y Blanca Inés Vélez Arbeláez se presentan como demandantes en compañía de los señores Daniel José Ramelli Botero y Wilhem Bellaiza Cantillo como propietarias y/o poseedoras de los bienes sobre los que se discute el cobro del impuesto predial, de los documentos allegados visibles a folios 270 y 309 respectivamente, no se desprende tal calidad, por tal razón la demanda no fue subsanada en debida forma frente a las referidas señoras.

La misma situación ocurre con el señor Álvaro Reyes Castro, quien aporta certificado de tradición pin nro. 180625918213449261 y documento de cobro impuesto predial nro. 000045402166 (folios 288-291), sin embargo, en dichos documentos figura como titular del derecho real de dominio Fiducolombia S.A. – Leasing de Crédito, y con ellos tampoco demuestra que ejerza la posesión del bien.

En consecuencia, se

RESUELVE

PRIMERO: OBEDEZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por providencia del 09 de agosto de 2019, proferida por el Consejo de Estado, en la cual resolvió revocar el auto interlocutorio nro. 09 del 23 de enero de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: RECHAZAR la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada a través de apoderado judicial por los señores (as) **LYDIA PATRIDE RAMELLI, ÁLVARO REYES CASTRO y BLANCA INÉS VÉLEZ ARBELÁEZ** contra el **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: ADMITIR la demanda instaurada por **ANA MARÍA ORTEGA BOTERO, ANDRÉS FELIPE QUINTANA TORO, DANIEL EDUARDO GALVIS / YOLANDA CADAVID DE GALVIS, EDGAR PABÓN CARVAJAL, LEÓN ANTONIO CIFUENTES VILLADA, GUILLERMO GÓMEZ CANALES / ADRIANA CAMPO RAMÍREZ, GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JAIME HERNANDO HURTADO LANGER / ADRIANA LATORRE DELGADO, LINA MARIA PALACIOS GÓMEZ, LUIS FERNANDO RICO ESCOBAR, LUZ MARIELA SÁNCHEZ LADINO, MARÍA CECILIA ARTURO ROJAS, PEDRO AUGUSTO MORA ORTIZ / MARÍA MARGARITA GÓMEZ RESTREPO, ESPERANZA MOCK KOW FLÓREZ, VÍCTOR ENRIQUE EL KHOURY SEJNAUI, JORGE ANDRÉS ZULUAGA SIERRA, JOSÉ DANIEL RAMELLI BOTERO, LEONOR PAULINA GÓMEZ, OLGA LUCÍA VELEZ ECHEVERRY EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD JULIO ENRIQUE VÉLEZ Y CIA SAS, MARÍA DEL PILAR HURTADO VARELA / ANTONY MICHEL BRADBURY, LUIS MERCHAN PAREDES / LUCY AMPARO GÓMEZ JAIMES, BEATRIZ ELENA HINCAPIÉ, DIEGO YUGUEROS IZQUIERDO, LUCERO CORREA DE DÁVILA, WILHEIM BELLAIZA CANTILLO, NUBIA MARÍA FERNÁNDEZ DE MARTÍNEZ / SANTIAGO MARTÍNEZ CADENA,**



FRANCISCO ANGULO MUÑOZ y HERNANDO SALAMANCA, a través de apoderado judicial en contra del **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**, en consecuencia dispone:

CUARTO: NOTIFICAR este auto a los demandantes en la forma prevista en el artículo 201 del CPACA, quien podrá consultarlo en la página web: www.ramajudicial.gov.co.

QUINTO: No hay lugar a fijar gastos ordinarios del proceso, pues la notificación personal corresponde a la parte actora; no obstante, de requerirse expensas, éstas se fijarán en su oportunidad.

SEXTO: NOTIFICAR personalmente la presente providencia a la parte demandada **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** a los buzones de correo electrónico creados por dichas entidades para efecto de recibir notificaciones judiciales de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA.

Como no se fijan gastos ordinarios del proceso, para cumplir lo anterior, **ORDENAR a la parte demandante**, de acuerdo con el artículo 199 del CPACA, **remitir** a quienes deben ser notificados personalmente, en el término improrrogable de DOS (02) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación por estado de la presente providencia, a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y de este auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a disposición de los notificados.

Así mismo, deberá aportar dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación por estado de la presente providencia, certificación de la entidad de servicio postal autorizado, en la que conste la remisión efectiva de la copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio, para lo cual allegará copia del oficio remisorio a la Secretaría del Tribunal.

Hasta tanto no se alleguen las constancias anteriormente referidas, no se procederá por la Secretaría de esta Corporación a realizar la notificación personal a los demandados. El incumplimiento de esta carga procesal dará lugar a la aplicación del artículo 178 del CPACA.

SEPTIMO: Al demandado **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**, al **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** se les correrá traslado de esta demanda por el término de treinta (30) días para contestarla, proponer excepciones, pedir pruebas, llamar en garantía y en su caso, proponer demanda de reconvención, acorde con el artículo 172 del CPACA. Este plazo comenzará a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación, como dispone el artículo 199 del CPACA.



OCTAVO: ADVERTIR a las entidad demandada, que durante el tiempo para dar respuesta a la demanda, deberá allegar con la contestación, **el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación que se demanda y se encuentre en su poder**. La inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto (artículo 175, parágrafo 1º del CPACA).

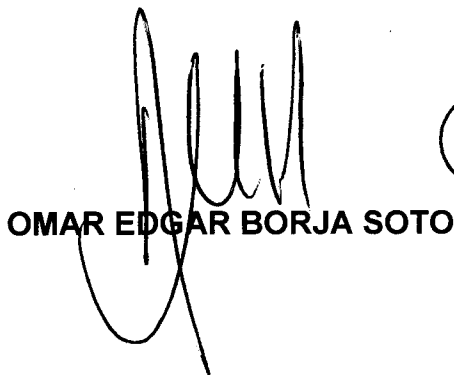
NOVENO: RECONOCER PERSONERÍA para actuar, como apoderado del señor JORGE ANDRÉS ZULUAGA SIERRA, al abogado JUAN CARLOS BECERRA HERMIDA, identificado con cédula de ciudadanía No.14.882.256 y portador de la tarjeta profesional No. 70.816 del Consejo Superior de la Judicatura en los términos y para los efectos a que alude el poder presentado visibles a folios 321-322.

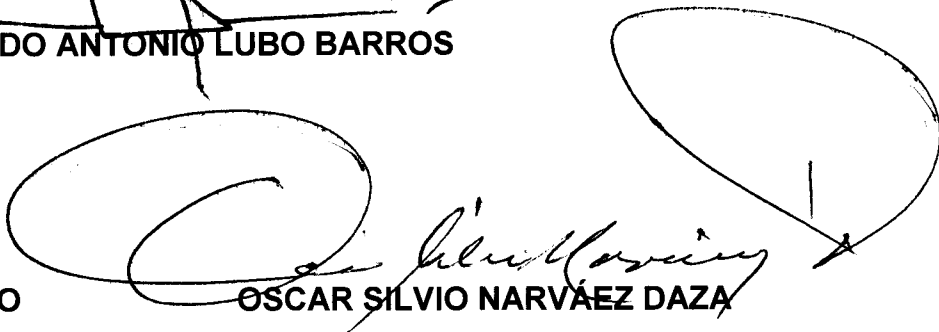
Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. (Acta No. ____).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los magistrados,


EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS


OMAR EDGAR BORJA SOTO


OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA